

Jaime Malet Perdigó

Quo vadis, Catalunya?

Agustí Calvet, *Gaziel*, director que fue de *La Vanguardia*, señalaba en 1934: “Cada vez que el destino nos coloca en una de esas encrucijadas decisivas en que los pueblos han de escoger (...) los catalanes nos metemos fatalmente, estúpidamente, en la que conduce al despeñadero”. Ya que a estas alturas no es fácil dirimir sosegadamente razones y responsabilidades de nuestra actual *encrucijada*, quizá valga la pena detenerse en sus posibilidades de éxito y apuntar previsibles consecuencias.

En las últimas décadas muchos territorios se han constituido en nuevos estados, pero hay muchísimos más donde una parte de la población querría independizarse sin posibilidad de lograrlo. Los nuevos estados nacen de intereses geoestratégicos, normalmente tras terribles guerras o desmantelamientos de imperios empobrecidos. En muy pocos casos los nuevos estados nacen por mutuo acuerdo de las partes (Chequia y Eslovaquia). Los intentos fallidos de Quebec y Escocia, de haberse producido, se encontrarían dentro de este último y ciertamente escaso grupo.

En mi opinión únicamente personal, en comparación con estos procesos, en Catalunya concurren algunas condiciones que trabajan en contra de dar una mínima probabilidad a la independencia. En primer lugar, no parece que el resto de la población española quiera que Catalunya se separe, lo que hace inviable un cambio constitucional que permita su planteamiento. El último barómetro del CIS sitúa a los partidarios de consentir la independencia en tan sólo el 9,7% de la población española. Asimismo, el 8 de abril del 2014 se sometió a consideración del Congreso una ley para que la Generalitat pudiese convocar un referéndum sobre el futuro de Catalunya. Sólo 47 diputados de toda España (13,4%) aprobó la proposición, aparte de que la mayoría de los diputados catalanes, 26 de los 48, rechazaron la propuesta. ¿Qué Gobierno democrático podría permitir la escisión de su territorio con el apoyo de sólo el 9,7% de su población?

En segundo lugar, la población catalana está muy dividida. El independentismo ha pasado rápidamente de un soporte del 25% a otro de alrededor del 40%, donde se ha estabilizado. Incluso contando con un apoyo

J. MALET PERDIGÓ, presidente de AmchamSpain

del 51% no se iría muy lejos. Y menos cuando ese apoyo podría ser coyuntural, y como otros ismos en Europa, haberse alimentado de la crisis de los últimos seis años. Los movimientos democráticos que quieren modificar las estructuras de un país suelen pivotar sobre una legitimidad abrumadora (3/4 de la población) y durante un largo periodo de tiempo. Declarar algo tan excepcional con mayoría de escaños en el Parlament, aunque sin mayoría de votos gracias a la ley D'Hondt, sería poco razonable y democrático. ¿Qué pasaría con esa mayoría de catalanes que no quiere la independencia? ¿Una vez el proceso se hubiese consumado, se les permitiría votar cada cierto tiempo para reunificarse con España? Pero lo más



IGNOT

importante, ¿qué país democrático del mundo dejaría a la intemperie a más de la mitad aproximada de la población por el coyuntural deseo del resto de romper con la legalidad?

En tercer lugar, para constituir un nuevo Estado no sólo hacen falta mayorías amplias y sostenidas en el tiempo sino el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional. No se trata aquí de obtener apoyo de algunos pequeños países o de la simpatía que pueda expresarse en algunos medios internacionales, sino de los padrinos que se precisan para ser reconocido en las Naciones Unidas y en el resto de los organismos internacionales incluyendo a la UE. Desde la paz de Westfalia de 1648 el orden mundial está basado en la integridad territorial consagrada en la mayoría de las constituciones del mundo. Las grandes potencias

—Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Rusia— difícilmente pueden estar interesadas en cambiarlo mediante un conflicto en medio de Occidente. Sería un ejemplo que seguir para fraccionar otros países en trozos cada vez menos gestionables, que además no es clave para la gobernanza del mundo, el suministro de energía o materias primas o la lucha global contra el terrorismo.

En definitiva, ¿es posible creer que realmente puede conseguirse la independencia sin la aquiescencia de la comunidad internacional, sin el apoyo unánime y sostenido de la población catalana, y sin el soporte del resto de España?

¿Adónde vamos? Pues, claramente, no hacia la independencia. Con posicionamientos unilaterales y sin diálogo, podríamos estar al inicio de un proceso largo y tedioso de conflicto permanente con el Estado. Una olla a presión que consumiría las energías de la población en un fuego fútil. Un goteo ininterrumpido de desencuentros que incrementarían diferencias, agravios y conflictos sin fin, haya o no razones. Mientras, perderíamos por el camino inversiones y talento, que acostumbran a no sentirse cómodos en lugares políticamente convulsos e inciertos.

A muchos puede atraerles ese marco de indefinición (y decadencia), porque ven la independencia al final del túnel, dentro de 25 o quizá 40 años. Creen, que con el tiempo, este fenomenal conflicto podría crear mayorías más sólidas en Catalunya, generar un gran cansancio en el resto de España y acabar por vencer a las grandes potencias. Y así, por un proyecto a largo plazo con unas posibilidades de éxito tan remotas, se podría llegar a sacrificar una parte importante del bienestar y de las capacidades de toda una generación.

En definitiva, en esta encrucijada decisiva de nuestra historia, similar a aquellas a las que se refería *Gaziel* en el año 1934, debería volver el *seny* que permita encauzar las energías del país hacia objetivos más realistas y proponga soluciones dialogadas. Los catalanes nos merecemos que se trabaje por un nuevo marco de convivencia, sin maximalismos, que permita a Catalunya desarrollar pacíficamente su enorme potencial mediante un papel menos periférico y más central en el desarrollo económico y en la consolidación y mejora de las instituciones de nuestra todavía muy joven democracia.●

Pilar Rahola



La gran coartada

Catalunya siempre ha sido una gran coartada para los desmanes del poder español de turno. Cada vez que algún gobierno atribulado ha querido coartar libertades, ha usado a Catalunya como escudo y... mano de santo, todos quieto-parados. Es mentar la bicha catalana y lo negro se vuelve gris, y lo escandaloso se torna digerible. Así ha sido hasta ahora, hasta el punto de que siempre que Catalunya ha levantado su impertinente dedo —excepto en la transición—, los ciudadanos españoles han sufrido una regresión de derechos, casi sin rechistar.

Sin rechistar o, incluso, con aplauso entusiasmado, como ha ocurrido con los comentaristas patrióticos al uso, que ya han aplaudido la escandalosa reforma exprés del TC que quiere hacer el PP. “Va contra Mas”, gritan en sus micrófonos disciplinados, con la saliva cayendo por el hocico. Y, sin embargo, es un craso error, porque esta reforma va contra cualquier ciudadano de cualquier origen o condición, no en vano es un ataque a la médula del Estado de derecho. Sin embargo, si se disfraza de urgencia nacional, con los

“Va contra Mas”, gritan en sus micrófonos disciplinados, con la saliva cayendo por el hocico

pesados catalanes amenazando con Itaca, la vaselina hace su efecto. Hace su efecto... o eso debía de pensar el PP, seguramente convencido de que el órdago catalán obligaría al PSOE, y al resto de la tropa, a comerse el engendro. Pero, será porque han tirado tanto de la cuerda, que han quebrado la paciencia, será porque ni con la excusa catalana se puede deglutir el veneno, lo cierto es que, por una vez, la gran coartada parece no servir de tal y hasta los de UPyD han puesto el freno. Lo cual es, quizás, la primera buena noticia que nos llega del reino, en términos de salud democrática. Por una vez, después de mucho descalabro, la mayoría de los partidos españoles han dado un paso atrás en el vendaval del “todo vale” con la excusa del proceso catalán. Es decir, se han plantado ante un PP cuya carrera sin freno en su desprecio por la democracia le lleva incluso a colocar al hijo de Tejero —el que celebra los aniversarios del 23-F en su cuartel— en el Consejo de la Guardia Civil. Cabe, pues, aplaudir que una parte sustancial de españoles haya entendido que lo que se inventa para atizar y reprimir a los catalanes acaba reprimiendo a todo el mundo.

Por supuesto, el PP puede culminar el desaguado con la apisonadora absoluta que aún detenta, pero es tan descomunal el atentado a las reglas democráticas, que ni por un “viva España” lo va a conseguir. No sólo se le rebela el resto de partidos, sino también abogados, jueces y el *tutti quanti* implicado. Puede que el PP pensara que por salvar a España de la perfidia catalana podía cargarse todo el equilibrio de poderes y fundar una autarquía. La mala noticia es que lo piensa y lo quiere perpetrar. La buena es que le saldrá el tiro por la culata, porque esto es un golpe blanco a la democracia, y ni la coartada catalana lo consigue disfrazar.●

Albert Fernández Terricabras

Impacto social y rentabilidad

Las empresas con impacto social han experimentado un gran auge entre otras razones por las crecientes necesidades sociales de la crisis; las menores ayudas en forma de subvenciones y donaciones, que han forzado a algunos proyectos sociales a *empresarializarse* para obtener ingresos; y la mayor conciencia social por parte de potenciales emprendedores, que buscan proyectos con impacto.

Aunque algunos lectores no estarán de acuerdo, para mí cualquier empresa, por el hecho de crear empleo, es social. Pero en este artículo me centraré sólo en las que tienen impacto social porque en ellas trabajan personas en riesgo de exclusión o con dificultades de acceso a trabajo, o porque proporcionan

productos o servicios a colectivos desfavorecidos. Es condición necesaria para estas empresas sociales la sostenibilidad. No pueden perder dinero indefinidamente. Pero ¿pueden ser rentables, es decir, obtener beneficios? No sólo pueden, sino que deben tenerlos. La clave para ser social no está en generar o no beneficios, sino en el uso de estos. Si son utilizados para reinversiones, fortalecer los proyectos y producir mayor impacto social en el futuro, ¿por qué no buscarlos?

El problema de muchos proyectos sociales es que, por un equivocado rechazo al crecimiento y a la rentabilidad, se quedan en pequeños proyectos sociales que producen un pequeño impacto social. ¿Por qué no crecer? ¿Por qué los proyectos sociales no pueden proporcionar rentabilidad al inversor y salarios de mercado a sus empleados? Si esa rentabilidad de capital puede ayudar a conse-

guir financiación que ayude a aumentar el impacto social, y esos salarios de mercado pueden ayudar a atraer talento, las empresas sociales deben ir a por ello.

No nos deben molestar unos beneficios, una rentabilidad justa y unos salarios adecuados. Lo que nos debe preocupar es generar impacto social. Y en muchos proyectos no hay contradicción alguna. Como aquellos en los que este impacto es proporcionado por los productos o servicios que se venden: proyectos de *output* social. A más venta, más impacto, más ingresos y más beneficios. O los proyectos de *input* social, que dan trabajo a colectivos en riesgo de exclusión, en los que una mayor rentabilidad fortalecerá el proyecto y su impacto. Dejemos las demagogias y busquemos rentabilidades justas, salarios dignos e impacto social. Así, ayudaremos a crear una sociedad mejor.●

A. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, profesor del Iese - Universidad de Navarra y director de Finaves